Política Sociedad

Héctor Molina



politica @eleconomista.mx

eleconomista.ma

COEDITOR GRAFICO: David Mercado

De septiembre del 2020 a junio pasado se han registrado 1,107 indagatorias por delitos migratorios, un alza de 68% si se compara con las 659 contabilizadas entre los mismos meses, pero de 2019 a 2020.

Ante la falta de celeridad en sus trámites de refugio buscan salir de Chiapas

Crece presión y violencia contra migrantes en el sur

•En los últimos 10 días, cuatro caravanas han sido disueltas por agentes de migración

> Maritza Pérez maritza perez@eleconomista mu

an pasado 10 días desde que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional iniciaron los operativos de contención para frenar el camino de cientos de migrantes que buscan salir de Chiapas debido a lo tardado de la resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. Durante los operativos, se han presentado situaciones de uso excesivo de la fuerza de las autoridades mexicanas contra migrantes, incluidos niñas y niños, denuncian ONG.

Las caravanas de migrantes, integradas mayoritariamente por personas originarias de Haití, Venezuela, Centroamérica y Guinea Ecuatorial, comenzaron a ser más visibles desde el pasado 28 de agosto, con aproximadamente 1,000 personas, entre ellas hombres, mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas, que decidieron dejar su estancia en Tapachula, Chiapas, después de pasar semanas e incluso meses afuera de las oficinas de registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y las oficinas de regularización migratoria



Los operativos realizados por funcionarios del INM y la Guardia Nacional se realizan en carreteras y zonas limítrofes de Chiapas, roto: RUTERS

del Instituto Nacional de Migración (INM), en aquella entidad.

Desde entonces, en al menos cuatro ocasiones han visto frustrado su intento de cruzar México hacia la frontera con Estados Unidos ante un creciente despliegue de fuerzas de seguridad.

El más reciente episodio violento se dio ayer, cuando desde la madrugada y por más de ocho horas de operativo y redadas en la comunidad de Huixtla, Chiapas, la cuarta caravana migrante que partió el sadado de Tapachula, Chiapas, para dirigirse al norte del país, e integrada por al menos 700 migrantes, fue dispersada de manera violenta.

Los migrantes buscaban descansar antes de partir rumbo a Villa Comaltitlán a 18 kilómetros de Huixtla. Ante la presencia de las autoridades, decenas de migrantes tomaron rutas alternas a través del campo o incluso iniciaron su trayecto por las vías del tren denominado como la *bestia*.

Abuso de fuerza

"La Guardia Nacional va con su uniforme de asalto y están siendo particularmente agresivos y crueles, porque lo que están haciendo es separar a las familias que tienen niños y niñas (...) El nivel de violencia es fuerte, hay gente lastimada y en estado de shock", advirtió Ana Saíz Valenzuela, directora General de Sin Fronteras IAP.

La activista añadió que el llamado de las organizaciones es a que se deje de usar esa fuerza brutal en contra la de las personas migrantes que lo unido que expresan es desesperación por la violencia y discriminación institucional a la que se han visto sometidos por esperar trámites que no se resuelven. "Hay un llamado urgente al INM para que resuelva ya la situación y solicitudes de las personas que han estado esperando o que tengan una vía para la regularización migratoria", añadió.

Además de insistir que se necesita un fortalecimiento inmediato a la Comar, sobre todo en las oficinas del sureste del país y que se debe implementar una mayor vigilancia de la actuación del INM por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Estamos muy preocupados por la vida e integridad de estas personas, esta violencia es inadmisible y el INM está fuera de control y tiene que estar vigilado por otras instituciones (...) mientras actúen con abuso de poder y en la opacidad no se va a resolver esta situación y por el contrario la gente se va a arriesgar aún más", resaltó.

Por su parte, Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, indicó que el poco control en materia de migración se debe a la insuficiencia de recursos tanto financieros como humanos.

"Sabemos que la infraestructura de las ciudades como Tapachula u otras ciudades son insuficientes; gobiernos locales no tienen recursos necesarios como para atender todo ese tipo de demanda, tienen las locales y no alcanza y con esta sobredemanda; tampoco es posible dar atención a la población excedente", comentó. (Con información de Iván Rodríguez)

Por infracciones de sus elementos, abren más de 3,000 expedientes en la GN



Jorge Monroy jorge.monroy@eleconomista.mx

A dos años de su creación, la Guardia Nacional ya acumula 3,491 expedientes de investigación contra elementos, de los cuales derivaron en 88 procedimiento disciplinarios, reconoció el gobierno federal en el Tercer Informe de Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su Intención de que la Guardia Nacional sea el cuerpo de seguridad más efectivo para reducir la inseguridad en el país, y que no sea un fracaso como la Policia Federal.

En el documento del Tercer Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal expuso que entre septiembre de 2020 y junio de 2021, dentro del proyecto cero tolerancia a la corrupción, se realizaron 428 inspecciones y visitas de supervisión a unidades administrativas de la Guardia Nacional y de fiscalización en tramos carreteros, "lo que derivó en la revisión de la actuación de 3,532 integrantes; se identificaron 233 inobservancias, y se recomendó a quienes coordinan la imple-

mentación de medidas disciplinarias oportunas".

Refirió que por faltas administrativas o infracciones cometidas por integrantes de la Guardia Nacional se concluyeron 3,491 expedientes de investigación y en 88 casos se solicitó el inicio de procedimientos ante el Consejo de Carrera o de disciplina correspondiente.

Indicó que la Guardia Nacional realizó investigaciones, vigilancia y supervisión para garantizar que sus integrantes se conduzcan con probidad y respeto a derechos humanos, así como inhibir abusos, excesos o actos de corrupción.

"Al 30 de junio de 2021 se tiene un avance del 25% en la ejecución del Proyecto Anticorrupción y Fomento a la Denuncia, destinado a identificar y determinar áreas de la Guardia Nacional que requieren atención prioritaria por el número de quejas y denuncias formuladas en su contra", expuso.

Mencionó que en dicho periodo se avanzó en el cumplimiento del Acuerdo Marco entre su gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la formación de la Guardía Nacional en matería de derechos humanos y su operación con base en estándares internacionales.

Hasta el 30 de junio pasado, la Guardia Nacional contaba con 99,946 elementos en 214 coordinaciones regionales en las 32 entidades.

@ EL ECONOMISTA

6 de septiembre del 2021

